

# La tradición constitucional en México (1808-1940)

TOMO II

Catherine Andrews  
(*Coordinadora*)



SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES  
MÉXICO



CIDE



Andrews, Catherine, coordinadora.

Título: *La tradición constitucional en México (1808-1940)*.

Responsable (s): Catherine Andrews (coordinadora).

Pie de imprenta: Ciudad de México : Centro de Investigación y Docencia Económicas : Secretaría de Relaciones Exteriores, Archivo General de la Nación, 2017.

Edición: Primera edición.

Descripción física: 496 páginas : ilustraciones; 24 cm.

Autor(es): Guzmán Pérez, Moisés ... [y otros autores mencionados en la tabla de contenido].

Identificadores: ISBN: 978-607-8508-12-9, ORCID: 0000-0001-6781-1391 (Catherine).

Serie: Constitución, v. II

Clasificación LC: KGF2919.Z9 C66 2017 v. II

Tema (s):

Constitutional history – Mexico

Mexico – Politics and government – 1808-1940

D.R. © 2017, CIDE, Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.  
Carretera México-Toluca 3655 (km 16.5), Lomas de Santa Fe, 01210, Ciudad de México  
[www.cide.edu](http://www.cide.edu) [editorial@cide.edu](mailto:editorial@cide.edu)

D.R. © 2017, SRE, Secretaría de Relaciones Exteriores  
Av. Juárez 20, Centro, 06010, Ciudad de México  
<https://www.gob.mx/sre>

D.R. © 2017, AGN, Archivo General de la Nación  
Av. Eduardo Molina 113, Penitenciaría Ampliación, 15280, Venustiano Carranza,  
Ciudad de México  
<https://www.gob.mx/agn>

ISBN (CIDE): 978-607-8508-12-9  
ISBN (SRE): 978-607-446-106-0  
ISBN (AGN): 978-607-97747-0-7

Dirección editorial: Natalia Cervantes Larios  
Cuidado editorial: Pilar Tapia y Nancy Rubio  
Diseño editorial: Natalia Rojas Nieto

Portada: Ilustración de Fabricio Vanden Broeck

Las características gráficas y tipográficas de esta edición son propiedad del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.

Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, la fotocopia o la grabación, sin la previa autorización por escrito de los titulares de los derechos de esta edición.

Impreso en México/Printed in Mexico

## ÍNDICE

### 9 *Presentación*

- 11 *Introducción: La tradición constitucional mexicana y la Constitución de 1917*,  
CATHERINE ANDREWS

#### PRIMERA PARTE: EL CONSTITUCIONALISMO EN EL SIGLO XIX Y LA TRADICIÓN CONSTITUCIONAL

- 23 *I. El primer constitucionalismo de la Independencia*,  
MOISÉS GUZMÁN PÉREZ
- 47 *II. El constitucionalismo republicano, 1814-1824*,  
MOISÉS GUZMÁN PÉREZ Y CATHERINE ANDREWS
- 73 *III. Reformar la Constitución de 1824: Planes, proyectos y constituciones, 1824-1847*,  
CATHERINE ANDREWS
- 97 *IV. Las constituciones y los derechos a la insurrección y de petición, 1821-1854*,  
ROSIE DOYLE
- 115 *V. La Constitución de 1857: Un texto renegado convertido en el símbolo del liberalismo*,  
FRÉDÉRIC JOHANSSON
- 137 *VI. Los proyectos constitucionales conservadores, 1857-1865*,  
GEORGINA LÓPEZ GONZÁLEZ
- 159 *VII. La “cuestión de Querétaro”: Significado y límites de la política constitucional tras la restauración de la república*,  
CARLOS BRAVO REGIDOR
- 179 *VIII. “La conciliación entre el capital y el trabajo”: Una contribución del catolicismo a la discusión de los problemas laborales en México, 1856-1917*,  
CECILIA ADRIANA BAUTISTA GARCÍA

#### SEGUNDA PARTE: LOS ANTECEDENTES DIRECTOS DE 1917

- 203 *IX. Las reformas sociales del Porfiriato y su legado en 1917:*  
*¿Liberalismo o justicia social?*,  
LUIS F. BARRÓN

- 215 X. *Convención y parlamentarismo, 1914-1915*,  
ISRAEL ARROYO GARCÍA
- 239 XI. *La Soberana Convención y el problema de la representatividad*,  
FELIPE ARTURO ÁVILA ESPINOSA
- 261 XII. *La Constitución de Coahuila como antecedente para el proyecto carrancista de la Constitución de 1917*,  
LUIS F. BARRÓN
- 281 XIII. *El pensamiento católico frente a las constituciones de 1857 y de 1917*,  
YVES SOLIS NICOT
- 303 XIV. *La revolución zapatista y la Constitución de 1917: Reforma agraria en la Revolución Mexicana*,  
MILES RODRÍGUEZ
- TERCERA PARTE: LAS MUTACIONES DE LA TRADICIÓN CONSTITUCIONAL:  
LA CONSTITUCIÓN DE 1917
- 325 XV. *Introducción a la Constitución de 1917: Las revoluciones y las reformas en los sistemas jurídicos*,  
MARÍA DEL REFUGIO GONZÁLEZ
- 337 XVI. *Freno a la tiranía: El presidencialismo en la Constitución de 1917*,  
MARÍA LUNA ARGUDÍN
- 359 XVII. *¿Catolicismo social en la Constitución de 1917?*,  
PABLO SERRANO ÁLVAREZ
- 379 XVIII. *El artículo 123 y la incorporación de legislación social a la Constitución de 1917: Discurso y realidad, 1906-1931*,  
WILLIAM SUÁREZ-POTTS
- 401 XIX. *Obstáculos y avances sobre la propiedad de la nación*,  
PAVEL NAVARRO VALDEZ
- 419 XX. *La administración de justicia y la Constitución de 1917*,  
TIMOTHY M. JAMES
- 441 XXI. *Constitución, nueva ley electoral y viejas costumbres: Elecciones y representación política*,  
JAVIER MAC GREGOR CAMPUZANO
- 467 XXII. *Libertad de expresión y delitos de imprenta en el marco legislativo revolucionario*,  
ANA MARÍA SERNA RODRÍGUEZ
- 489 *Sobre los autores*

## Presentación

En 2013, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) estableció el “Programa de Estudio de la Constitución de 1917 en su Primer Centenario” con el fin de contribuir con investigación original al estudio de la tradición constitucional mexicana, su relación con el texto constitucional de 1917, el constitucionalismo en los estados y la tradición constitucional en América Latina. En colaboración con el Archivo General de la Nación (AGN) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), entre 2013 y 2015, se llevaron a cabo una serie de coloquios y seminarios en los que participaron sesenta y cuatro investigadores provenientes de México, América Latina, Estados Unidos y Europa.

Ahora, para conmemorar el centenario de la Constitución, el CIDE, el AGN y la SRE presentan el resultado de este trabajo colectivo: una colección de tres libros que buscan contribuir al debate sobre las circunstancias que dieron lugar al Congreso Constituyente de 1916-1917, sobre cómo se escribió nuestra Constitución, sobre las continuidades y rupturas con el pasado, sobre cómo se ha aplicado durante estos cien años y a qué han respondido sus procesos de reforma, sobre el contexto internacional y sobre su relación con la tradición constitucional en América Latina, para así contribuir con seriedad a la reflexión de qué es lo que podemos y no podemos hacer con el texto constitucional hoy.

Los libros: *Un siglo de constitucionalismo en América Latina (1917-2017)*, *La tradición constitucional en México (1808-1940)* y *El constitucionalismo regional y la Constitución de 1917*, están coordinados por Catherine Andrews de la División de Historia del CIDE y editados por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Archivo General de la Nación.

Dr. Luis Videgaray Caso  
Dr. Sergio López Ayllón  
Dra. Mercedes de Vega

### III. REFORMAR LA CONSTITUCIÓN DE 1824

#### Planes, proyectos y constituciones, 1824-1847

Catherine Andrews\*

Durante los treinta años que siguieron a la promulgación de la Constitución Federal de 1824 hubo un debate político casi constante en torno a la cuestión constitucional. La omnipresencia de la crítica constitucional derivaba de la fe que Charles Hale ha denominado "la magia de las constituciones":<sup>1</sup> la idea de que si México podía establecer una constitución que rigiera la república de acuerdo con los principios liberales, la prosperidad y la paz estarían garantizadas. Con una constitución cuya arquitectura impedía el despotismo y permitía la representación eficaz de los ciudadanos, los políticos confiaron en que México podría salir del caos en que vivía desde 1810 y tomar el lugar que merecía entre las potencias mundiales.

De acuerdo al lugar primordial que los políticos del México independiente otorgaron a la constitución como requisito para el futuro desarrollo económico y social de la República, solían interpretar los problemas políticos, económicos y sociales del momento como resultado de fallos en el sistema constitucional. En consecuencia, durante la década de 1830 los críticos de la Constitución de 1824 sugirieron que la penuria financiera del gobierno se derivaba del sistema federal. Después de la promulgación de las Siete Leyes en 1836, los federalistas harían la misma crítica respecto del sistema centralista.

En este contexto, no nos debe sorprender el hecho de que durante los primeros treinta y cinco años de vida independiente en México se promulgaran tres constituciones (1824, 1836 y 1843); cinco actas o bases constitucionales (1824, 1835, 1841 y 1853); un acta de reforma constitucional (1847: a la Constitución de 1824); así como innumerables proyectos de constitución y reforma constitucional (véanse los cuadros I y II).

\* División de Historia, Centro de Investigación y Docencia Económicas.

La investigación de este trabajo se realizó con el apoyo de Francisco Javier Beltrán Abarca, Óscar Rodrigo Carbajal Luna, Daniela Herrera de la Cruz, Jocelyn Linares Alonso, Sandino Miguel Rodríguez Rodríguez y Ana Lilia Romero Valderrama. Quiero extenderles mi agradecimiento por su ayuda.

<sup>1</sup> Charles A. Hale, *El liberalismo mexicano en la época de Mora*, México, Siglo XXI, 1999, p. 81.

## CUADRO III.1. TEXTOS CONSTITUCIONALES EN VIGOR (1824-1855)

<i>Constituciones</i>	<i>Bases Constitucionales</i>
Constitución Federal (1824)	Acta Constitutiva (1824)
Siete Leyes (1836)	Bases Constitucionales (1835)
Bases Orgánicas (1843)	Bases de Tacubaya (1841)
	Acta Constitutiva y de Reformas (1847)
	Bases para la Administración de la República (1853)

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO III.2. PROYECTOS DE CONSTITUCIÓN  
Y REFORMA CONSTITUCIONAL (1824-1855)

<i>Proyectos de reforma constitucional</i>	<i>Proyectos de constitución</i>
<i>A la Constitución de 1824</i>	<i>Siete Leyes</i>
Presentado por la legislatura del Estado de México (17 y 26 de julio de 1830)	José Mariano Michelena, <i>Proyecto de Constitución presentado al Congreso General</i> (1835)
Presentado por la legislatura de Nuevo León (12 de junio y 4 de septiembre de 1830)	Proyecto del primer ley constitucional (17 de octubre de 1835)
Presentado por la legislatura de Puebla (2 de septiembre de 1830)	Proyecto del segundo ley constitucional (4 de diciembre de 1835)
Presentado por la legislatura de Querétaro (8 de octubre de 1830)	Proyecto del tercer ley constitucional (25 de febrero de 1836)
Presentado por la legislatura de Tamaulipas (15 de noviembre de 1830)	Proyecto del cuatro ley constitucional (2 de mayo de 1836)
Presentado por la legislatura de Veracruz (2 de diciembre de 1830)	Proyecto del quinto ley constitucional (5 de agosto de 1836)
Presentado por la legislatura de Michoacán (sin fecha)	Proyecto del sexto ley constitucional (11 de noviembre de 1836)
Dictamen de la cámara de diputados sobre reformas constitucionales (20 de mayo de 1831)	Proyecto del séptimo ley constitucional (30 de noviembre de 1836)
Dictamen de la cámara de senadores sobre reformas constitucionales (30 de abril de 1831)	<i>Bases Orgánicas</i>
Lucas Alamán, <i>Reflexiones sobre algunas reformas a la Constitución Federal de la República Mexicana</i> [1830] (1835)	Primer proyecto de constitución (25 de agosto de 1842)
Dictamen de la mayoría de la Comisión de Constitución y voto particular de sus miembros [Mariano Otero] (5 de abril de 1847)	Voto particular de la minoría de la comisión de constitución (25 de agosto de 1842)
<i>A las Siete Leyes</i>	Segundo proyecto de constitución (3 de noviembre de 1842)
Proyecto de reforma a las bases constitucionales de la República Mexicana (30 de junio de 1840)	Proyecto de Bases de Organización para la República Mexicana (20 de marzo de 1843)

Fuente: Elaboración propia.

Tampoco nos debe parecer raro que la vasta mayoría de rebeliones y pronunciamientos del periodo se lanzaran con objetivos constitucionales. Para los políticos mexicanos de la primera mitad del siglo XIX, la organización constitucional no era una cuestión menor, era —tal vez— la más importante de todas. Era imprescindible para el bien de la nación lograr el sistema que daría pie a la estabilidad y la prosperidad.

El eje motor de la discusión era casi siempre el de los fallos de la Constitución de 1824. A partir de 1830, cuando primero se discutían posibles reformas a este código, hasta los debates durante la dictadura de Antonio López de Santa Anna entre 1853 y 1855, la consigna era constituir la República de una manera que evitara los errores de 1824. Después de 1836, hubo un grupo político conocido como “los puros”, que buscó restaurar la Constitución de 1824 en su forma original, pero la gran mayoría de los federalistas convenía primero con Manuel Gómez Pedraza, y luego con Mariano Otero, en que cualquier restauración o sustitución debía hacerse con cambios profundos —entre otras cosas— en cuanto a la relación entre el gobierno nacional y el estatal. Por su parte, los promotores de las Siete Leyes, y luego los de las Bases Orgánicas de 1843, justificaron los cambios que introdujeron en la división de poderes, la representación y la organización provincial con repetidas menciones a las funestas consecuencias de la arquitectura constitucional de 1824.

En este capítulo identifiqué las principales críticas a la organización constitucional de 1824 e intenté mostrar el desarrollo de las diferentes soluciones que los grupos políticos e individuos ofrecieron para resolver estos problemas en los proyectos constitucionales hasta 1847. Se verá que para la década de 1840 ningún grupo político consideraba la Constitución de 1824 una carta viable ni deseable para México. Es más, para 1847 los más fervientes defensores del sistema federal —en particular Mariano Otero, autor intelectual del Acta de Reforma— habían adoptado muchas de las ideas y argumentos de los arquitectos de las Siete Leyes de la década de 1830.

Ahora bien, ¿cuáles eran las críticas de la Constitución Federal de 1824 que marcaron el debate político entre 1824 y 1847? Por razones de brevedad, se pueden resumir de la siguiente manera:

1. No estableció reglas uniformes para la realización de las elecciones. En los estados las prácticas electorales establecidas propiciaban el fraude, la manipulación electoral y la elección de gente poco apta para las tareas electorales, legislativas y gubernativas.
2. No introdujo unos requerimientos nacionales para alcanzar la ciudadanía, de modo que se podía ser ciudadano en un estado pero no en otro.
3. No impuso los requisitos necesarios para asegurar que hubiera gente adecuadamente formada y con experiencia útil para ejercer los cargos de elección.

4. No consiguió construir una división de poderes funcional. Había un desequilibrio de facultades entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo que hacía inestable el gobierno. No proveía, además, de una manera eficaz para impedir que los tres poderes (en la terminología de la época) salieran de "la órbita de sus atribuciones".
5. No permitía el debido castigo a los gobernantes, legisladores, magistrados y funcionarios que cometían infracciones a la constitución.
6. No establecía una relación de clara jerarquía entre poderes federales y poderes estatales. Los estados tenían autonomía incluso para armar su propio ejército y rebelarse contra el gobierno nacional.

Dados los límites de espacio, este ensayo no puede seguir el debate en torno a todos estos temas durante el periodo de 1824 a 1855,<sup>2</sup> de modo que solamente hablaré de los elementos que me permiten desarrollar mejor el argumento esbozado arriba acerca de la relación entre las críticas de la década de 1830 y el Acta de Reforma. En consecuencia, mi exposición girará en torno a tres cuestiones en particular: federalismo, derechos y garantías individuales, y el diseño institucional de los ramos de gobierno.

### FEDERALISMO

El sistema federal de la Constitución de 1824 se desprendió de un debate importante sobre la forma de gobierno que debía adoptar la nueva República mexicana durante 1823. Hoy día muy pocos historiadores aceptarían la hipótesis dominante en el siglo xx que postulaba que México copió el federalismo de su vecino del norte. De hecho, las investigaciones que se han realizado demuestran que el sistema federal tenía sus raíces primero en la administración y cultura política colonial y, luego, en la experiencia del gobierno de la Constitución de Cádiz a partir de 1820.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> He analizado este debate de manera detallada en otros trabajos, véase Catherine Andrews, "Discusiones en torno a la reforma de la Constitución Federal de 1824 durante el primer gobierno de Anastasio Bustamante (1830-1832)", *Historia Mexicana*, vol. 56, núm. 1, 2006, pp. 71-116; "¿Reformar o reconstituir? El debate en torno al destino de la Constitución Federal y el sistema de gobierno (1830-1835)", en Marco Landavazo y Agustín Sánchez Andrés (coords.), *Experiencias republicanas y monárquicas en México, América Latina y España*, Morelia, UMSNH, 2008, pp. 15-42; "Reflexiones sobre algunas reformas a la Constitución Federal de la República Mexicana", *Anuario Mexicano de Historia del Derecho*, vol. 25, 2012, pp. 143-214; "Las ideas de José María Luis Mora para la reforma de la Constitución Federal de 1824. Un análisis de los ensayos publicados en *El Observador de la República Mexicana* (1830)", en Rafael Estrada Michel y Mario Armando Téllez González (coords.), *José María Luis Mora. Un hombre de su tiempo*, México, INACIPE/UAM-Cuajimalpa, 2014, pp. 1-35.

<sup>3</sup> Vid. Nettie Lee Benson, *La diputación provincial y el federalismo mexicano*, México, El Colegio de México/UNAM, 1994; Marcello Carmagnani, "Territorios, provincias y estados: Las transformaciones de los espacios políticos en México", en Josefina Zoraida Vázquez (coord.), *La fundación del Estado Mexicano, 1821-1855*, México, Nueva Imagen, 1997, pp. 39-73; y los ensayos de Josefina Zoraida Vázquez (coord.), *El establecimiento de federalismo en México (1821-1827)*, México, El Colegio de México, 2003.



En cambio, hay menos consenso en cuanto a la naturaleza del federalismo mexicano. La Constitución de 1824 no estipula bien a bien qué clase de sistema inaugura, si uno federal o una confederación. El Acta Constitutiva, que la precedía y que formaba parte de las leyes constitucionales establecidas en 1824, reconocía tanto la soberanía nacional como la de los estados. No obstante, numerosos historiadores argumentan que, en la práctica, el sistema que se adoptó en 1824 no respetó la idea de una soberanía compartida. Los estudios de Josefina Zoraida Vázquez afirman que la federación mexicana se asemejaba, en realidad, “al anti-federalismo jeffersoniano”. La Constitución gobernaba “estados, no ciudadanos”<sup>4</sup> y, por lo tanto, debía clasificarse casi como confederal. Marcello Carmagnani ilustra esta situación con el tema del contingente. Observa que los estados tenían la facultad de establecer y cobrar contribuciones a sus ciudadanos en sus territorios, mientras que transferían una parte de sus ingresos a la Hacienda nacional en un pago mensual conocido como el contingente. Como el gobierno general carecía de elementos para obligar a los estados a efectuar este pago, las autoridades nacionales se encontraban en un estado de penuria casi constante.<sup>5</sup>

Por su parte, Israel Arroyo sostiene que cuatro elementos prueban que “predominó una noción confederalista” en el Constituyente de 1824: 1) los estados definieron la ciudadanía y los derechos individuales; 2) los estados podían mantener sus ejércitos estatales en forma de milicias cívicas; 3) el poder electoral efectivo estaba en manos de los estados: las legislaturas estatales votaban corporativamente para elegir al Ejecutivo federal y, en las elecciones al Legislativo federal, el último grado del sistema indirecto —donde se nombraban los representantes— era la junta estatal, y 4) los estados tenían control sobre las contribuciones. Arroyo vincula su análisis de este tema con la idea de que el federalismo mexicano evolucionó de las organizaciones políticas y territoriales de la Nueva España.<sup>6</sup>

El trabajo de Jesús Hernández Jaimes, sin embargo, cuestiona la idea de que la primera república mexicana haya sido de naturaleza confederal. Muestra que tanto el Imperio de Iturbide como el gobierno nacional preconstitucional de 1823 a 1824 se caracterizaron por una extrema debilidad frente a la autonomía de hecho de las provincias. Señala, por ejemplo, que la autoridad efectiva de

<sup>4</sup> Josefina Zoraida Vázquez, “El fracaso del liberalismo centralista mexicano”, en *Anuario del IEHS*, 1996, pp. 111-112. De la misma autora, véase “El federalismo mexicano, 1823-1847”, en Marcello Carmagnani (coord.), *Federalismos latinoamericanos: México/Brasil/Argentina*, México, FCE/Fideicomiso Historia de las Américas, 1993, pp. 15-50; “El primer liberalismo mexicano”, en Josefina Zoraida Vázquez (coord.), *Recepción y transformación del liberalismo en México. Homenaje al profesor Charles A. Hale*, México, El Colegio de México, 1999, pp. 31-40; “A manera de introducción”, en Josefina Vázquez (coord.), *El establecimiento de federalismo...*, op. cit., pp. 15-38.

<sup>5</sup> Marcello Carmagnani, “El federalismo liberal mexicano”, en Marcello Carmagnani (coord.), *Federalismos latinoamericanos: México/Brasil/Argentina*, México, FCE/Fideicomiso Historia de las Américas, 1993, pp. 135-179.

<sup>6</sup> Israel Arroyo García, *La arquitectura del Estado mexicano: Formas de gobierno, representación política y ciudadanía, 1821-1857*, México, Instituto Mora, 2011, pp. 127-129.



Iturbide no se extendía más allá del Valle de México, al menos en términos de su capacidad de recaudar impuestos. Sin embargo, cuando analiza los debates del Constituyente de 1823 en torno a la división de competencias fiscales, argumenta que “las posturas confederalistas fueron derrotadas” a favor de un arreglo que favorecía a la federación.<sup>7</sup> Señala que cuando tales debates tuvieron lugar, los estados controlaban *de facto* el sistema fiscal en sus territorios. No obstante, los diputados acordaron entregar el control de la recaudación de alcabalas sobre las importaciones y los aranceles marítimos.

Asimismo, Hernández Jaimes subraya que la Constitución de 1824 no había otorgado entera libertad a los estados para dirigir la política fiscal. Al contrario, “el artículo 50, apartado 8º [...] reconoció el derecho del Congreso General a ‘fijar los gastos generales, establecer las contribuciones necesarias para cubrirlos, arreglar su recaudación, determinar su inversión y tomar anualmente cuentas al gobierno’”.<sup>8</sup> Como resultado, “el gobierno general salió fortalecido con el pacto federal” si se compara con el arreglo realmente existente en 1823.<sup>9</sup> En el Congreso prevaleció la convicción de que era necesario “garantizar la subsistencia” del Estado nacional sobre los intereses de los estados.<sup>10</sup>

El desacuerdo historiográfico refleja de manera fiel las confrontaciones entre los políticos de las décadas de 1820 y 1830 en torno al tema federal. Uno de los asuntos que provocaba más controversia fue si el Gobierno General podría imponer impuestos a la propiedad y a la población en general, tal como lo intentó hacer Lorenzo de Zavala en 1829 como secretario de Hacienda.<sup>11</sup> Por un lado, estaban los que argumentaban que el principio de soberanía compartida significaba que el límite de acción del Gobierno General era la frontera de los estados; de modo que fueron los estados los únicos facultados para gravar a los ciudadanos. La Secretaría de Hacienda solamente podría disponer del contingente y los ingresos de sus ramos propios (aduanas y monopolios). Desde este punto de vista, las acciones de Zavala se caracterizaban como centralistas y un ataque “atentatorio a la soberanía” de los estados.<sup>12</sup>

Por otra parte, estaban los que insistían en que el sistema federal creaba una jerarquía entre gobiernos estatales y el general. Éste fue el punto de vista, por ejemplo, de José María Luis Mora, quien al escribir sobre el tema de la recaudación de impuestos en mayo de 1830 argumentaba que:

<sup>7</sup> Jesús Hernández Jaimes, *La formación de la Hacienda pública mexicana y las tensiones centro-periferia, 1821-1835*, México, El Colegio de México/IIH-UNAM/Instituto Mora, 2013, pp. 171-172.

<sup>8</sup> *Ibid.*, pp. 22-23.

<sup>9</sup> *Ibid.*, p. 403.

<sup>10</sup> *Ibid.*, pp. 171-172.

<sup>11</sup> Para detalles del programa económico de Lorenzo de Zavala en el gobierno de Guerrero, véase José Antonio Serrano Ortega, “Tensor hasta romperse, la política de Lorenzo de Zavala”, en Leonor Ludlow (coord.), *Los secretarios de Hacienda y sus proyectos (1821-1933)*, México, IIH-UNAM, 2002, vol. 1, pp. 87-110.

<sup>12</sup> Legislatura del Estado de México al presidente, 16 de septiembre, citado en *ibid.*, p. 108.

Los que alegan que la soberanía de los estados contra la facultad que tratamos [recaudar impuestos], se olvidan de que esa soberanía está circunscrita a su gobierno interior, y [...] se olvidan asimismo de que estos estados que por un aspecto son soberanos, por otros *son súbditos de la comunidad de ellos mismos que se llama federación*.<sup>13</sup>

Durante la administración de Anastasio Bustamante (1830-1832), los críticos de la Constitución Federal proponían introducir legislación que garantizara que la interpretación confederal no tuviera sustento. En su espacio editorial, *El Sol* reiteró los argumentos de Mora para insistir en que el gobierno central controlara la recaudación de impuestos en toda la república. En su opinión, México debía copiar el federalismo fiscal practicado en Estados Unidos donde “el congreso general decreta impuestos sobre objetos que le parecen de los estados, las legislaturas reglamentan el cobro y se verifica, y si no se cumple se puede exigir por los agentes del gobierno”.<sup>14</sup>

Asimismo, el proyecto de reforma constitucional que escribió Lucas Alamán en 1830 citaba favorablemente el ejemplo estadounidense. Alamán empezó su propuesta exponiendo las circunstancias que habían llevado a los federalistas norteamericanos a abandonar el confederalismo y adoptar el sistema federal en 1787. La implicación del relato era clara: era momento para reformar el sistema federal mexicano para que se pareciera más al federalismo de la Constitución de 1787 y menos al sistema confederal norteamericano.<sup>15</sup>

En 1835 casi todos los constituyentes convenían en establecer una versión reformada de la Constitución de 1824, en la que se adoptara un federalismo moderado que redujera la autonomía de los estados y con un corpus legislativo nacional en materia de hacienda, justicia y derechos individuales. Para entonces, la crítica más encendida del federalismo de la carta federal era su incapacidad de enfrentar los retos de los gobiernos de estados que abiertamente rechazaban la autoridad del Gobierno General hasta el extremo de declarar la guerra en su contra, como había sucedido en Zacatecas y Texas.<sup>16</sup>

La principal diferencia entre los dos bandos estribaba en el nivel de autonomía que estaban dispuestos a conceder a los estados. Bernardo Couto, para entonces federalista, afirmó que se debía reservar “al Congreso General la facultad de formar los códigos civil y criminal para toda la República”,<sup>17</sup> y concedió que el control de los estados sobre la imposición y recaudación de impuestos

<sup>13</sup> “Política”, *El Observador de la República Mexicana*, segunda época, vol. 1, núm. 11, 12 de mayo de 1830, pp. 364-366.

<sup>14</sup> *El Sol*, núm. 381, 16 de julio de 1830, pp. 1523-1524.

<sup>15</sup> Lucas Alamán, “Reflexiones sobre algunas reformas a la Constitución Federal de la República Mexicana”, en Catherine Andrews, *Anuario Mexicano de Historia del Derecho*, vol. 25, 2012, pp. 186-189.

<sup>16</sup> *El Sol*, 2 de febrero de 1835, p. 7.

<sup>17</sup> Cámara de Senadores, *Dictamen de la comisión especial de la cámara de senadores sobre el cambio de la forma de gobierno y voto particular del sr. Bernardo Couto*, México, Imprenta del Águila, 1835, p. 32.

“agob[ia]ba] ya a la parte industriosa de la Nación”. Para remediar esta situación sugirió que se establecieran “bases generales del sistema de Hacienda” para toda la República.<sup>18</sup> Igualmente, otro defensor de la Constitución de 1824, Guadalupe Victoria, se pronunció a favor de imponer “ciertas restricciones a la soberanía de los Estados”.<sup>19</sup> Aunque creía que los estados debían establecer sus propios códigos criminales, aconsejó que se fijaran las “bases generales de la administración de justicia” a nivel federal de las que la legislación estatal “no pudiese apartarse”.<sup>20</sup>

A pesar de la pretensión de las Bases Constitucionales de 1835 de efectuar una reorganización territorial de la república, el texto de las Siete Leyes no tocó la división política de México.<sup>21</sup> La sexta ley estipulaba que la forma de gobierno sería centralista en el sentido de que se abolía la idea de que los estados fueran soberanos, libres para gobernar autónomamente dentro de sus territorios. No obstante, no los desmembró para crear territorios administrativos más chicos, sino que simplemente transformó los estados antiguos en departamentos. Asimismo, permitió que las nuevas entidades preservaran cierto grado de autonomía gubernamental y administrativa. Por ejemplo, la Constitución de 1824 prevenía que los estados tendrían los tres poderes de gobierno, precisó que el Poder Legislativo estaría en manos de una legislatura electa y le dejó la libertad de establecer el número de diputados de ella, así como la composición de los Poderes Judicial y Ejecutivo (art. 157).<sup>22</sup> En la práctica la mayor parte de las constituciones estatales dejaron en manos de la legislatura tanto la designación del gobernador como el nombramiento de los miembros del Poder Judicial. La sexta ley de 1836 no cambió muchas cosas: estipulaba que los departamentos se gobernarían por una junta de siete miembros, todos elegidos popularmente, y por un gobernador que el Gobierno General nombraría a partir de una terna presentada por la junta (6ª ley, arts. 5 y 9).<sup>23</sup>

<sup>18</sup> *Idem.*

<sup>19</sup> Guadalupe Victoria, *Voto particular del senador Guadalupe Victoria sobre el proyecto de ley en que se declara que las actuales Cámaras tienen facultad para variar la forma de gobierno*, México, Imprenta del Águila, 1835, p. 7.

<sup>20</sup> *Idem.*

<sup>21</sup> Art. 8. “El territorio nacional se dividirá en Departamentos, sobre las bases de población, localidad y demás circunstancias conducentes: Su número, extensión y subdivisiones detallará una ley constitucional”, en “Bases constitucionales expedidas por el Congreso Constituyente, 15 de diciembre de 1835”, en Gloria Villegas Moreno y Miguel Ángel Porrúa Venero (coords.), *Leyes y documentos constitutivos de la nación mexicana. Entre el paradigma político y la realidad*, t. 2, México, Instituto de Investigaciones Legislativas de la Cámara de Diputados, LVI Legislatura, 1997 (Enciclopedia Parlamentaria de México, serie 3, vol. 1), p. 198.

<sup>22</sup> “Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos”, en Gloria Villegas Moreno y Miguel Ángel Porrúa Venero (coords.), *Leyes y documentos constitutivos de la nación mexicana. De la crisis del modelo borbónico al establecimiento de la República Federal*, t. 1, México, Instituto de Investigaciones Legislativas de la Cámara de Diputados, LVI Legislatura, 1997 (Enciclopedia Parlamentaria de México, serie 3, vol. 1), pp. 335-361.

<sup>23</sup> “Leyes constitucionales de 1836”, en Gloria Villegas Moreno y Miguel Ángel Porrúa Venero (coords.), *Entre el paradigma..., op. cit.*, pp. 202-234.

Las juntas departamentales también conservaron muchas de las facultades de las legislaturas estatales para el nombramiento de los supremos poderes. En la Constitución de 1824 las legislaturas de los estados elegían al presidente, a los senadores y a los miembros del Poder Judicial (arts. 25, 79 y 127). De acuerdo con los términos de las Siete Leyes, las juntas también elegirían al presidente y a los senadores, aunque ya no escogieran libremente a sus representantes, sino que votarían a partir de una terna previamente establecida por el Congreso General (6ª ley, arts. 2 y 8). Igualmente, las juntas tenían el derecho, tal como lo habían tenido las legislaturas de los estados, de presentar iniciativas de ley al Congreso General.<sup>24</sup>

Ninguno de los demás proyectos constitucionales de este periodo proponía regresar al federalismo original de la Carta de 1824. Los tres proyectos de constitución de 1842 y las Bases Orgánicas, en cambio, propusieron versiones reformadas de las Siete Leyes. Los primeros para fortalecer la posición de los estados frente al gobierno general, y el último para reducir sus facultades aún más.<sup>25</sup> El voto particular de Mariano Otero, que formaba la base ideológica del Acta de Reforma de 1847, también rechazó explícitamente un federalismo de soberanía compartida. Otero argumentaba que el fallo fundamental de la carta de 1824 era que no había podido garantizar los límites de las facultades de los estados ni del Gobierno General. Como resultado, ambos invadieron las competencias de los otros, creando una situación insostenible. Al igual que los críticos de la década de 1830, Otero subrayaba que la Constitución en su forma actual permitía una situación en la que:

Algunas legislaturas han suspendido las leyes de este Congreso; otra ha declarado expresamente que no se obedecerá en su territorio ninguna [...] un Estado anunció que iba a reasumir la soberanía que se había desprendido [...] se está formando una coalición que establecerá una Federación dentro de otra [...] Con tales principios, la Federación es irrealizable, es un absurdo.<sup>26</sup>

Como se verá en el apartado siguiente, Otero pensaba que era indispensable que se erigiera una serie de mecanismos constitucionales que garantizaran la autoridad del gobierno federal sobre la de los estados. Para que el sistema federal fuera funcional, insistía en que era indispensable que el acta de reforma declarara:

<sup>24</sup> 6ª ley constitucional, art. 14.

<sup>25</sup> El segundo proyecto de 1842, que proponía regresar al sistema federal, no reconocía la soberanía de los estados. El artículo 24 decía: "La administración interior de los estados será enteramente libre e independiente de los poderes supremos, en todo aquello que no estén obligados por esta constitución para la conservación de la unión federal", "Segundo proyecto de constitución", en Gloria Villegas y Miguel Ángel Porrúa Venero (coords.), *Entre el paradigma...*, op. cit., pp. 322-374.

<sup>26</sup> "Voto particular de Mariano Otero (5 de abril de 1847)", *La Suprema Corte de Justicia. Sus leyes y sus hombres*, México, SCJN, 1985, pp. 136-137.

Que ninguno de los Estados [...] en ningún caso pueden por sí mismos, en uso de su soberanía individual, tomar resolución alguna acerca de aquellos objetos ni proveer a su arreglo más que por medio de los Poderes Federales, ni reclamar más que el cumplimiento de las franquicias que la Constitución les reconoce.<sup>27</sup>

## DISEÑO INSTITUCIONAL

Los críticos de la Constitución Federal de 1824 también insistieron en que la división de poderes a nivel del gobierno nacional era inadecuada para impedir que los poderes públicos sobrepasaran sus facultades constitucionales. Según Francisco Manuel Sánchez de Tagle, uno de los autores más importantes de las Siete Leyes, la Constitución de 1824 no tenía ningún mecanismo para castigar estos abusos; más bien su estructura propiciaba que:

los Poderes Legislativo y Ejecutivo [...] se coluden cuando les parece que hay peligro común, y entonces se ayudan mutuamente para salir de la órbita de sus atribuciones, atacar impunemente los del Judicial y hollar la constitución sin escrúpulo. El Legislativo da entonces leyes de proscripción, decretos de embargos, de despojos, y el Ejecutivo los sanciona y ejecuta gustoso: aquel, después de haber reasumido los poderes, los adjudica al Ejecutivo con nombre de facultades extraordinarias, y éste las desempeña perfectamente, imponiendo contribuciones individuales, aprisionando, desterrando y haciendo todo lo que le place.<sup>28</sup>

En la década de 1830, los críticos de la Constitución Federal convinieron en que el problema radicaba en el diseño institucional y el reparto de facultades establecido por este código. Se creía que la carta federal otorgaba demasiadas atribuciones al Poder Legislativo, de modo que era el poder supremo *de facto* en el gobierno, por lo que bien podría pasar por alto la Constitución sin consecuencias. Como decía Lucas Alamán, por ejemplo, el Congreso legislaba, pero también participaba en el quehacer ejecutivo al aprobar los nombramientos del presidente. Igualmente era el intérprete único de la Constitución (art. 165), y el tribunal en que se oían las causas contra los magistrados, ministros, legisladores y funcionarios (art. 164).<sup>29</sup>

De acuerdo con este análisis, otro de los problemas fundamentales del Poder Legislativo era la organización bicameral del Congreso General. Sus críticos se quejaban de que tanto una cámara como la otra tenían las mismas facultades, por lo que ninguna podría funcionar efectivamente como contrapeso de la otra. Argumentaba José Ramón Pacheco, por ejemplo, que “las cámaras generales no

<sup>27</sup> *Ibid.*, p. 137.

<sup>28</sup> Francisco Manuel Sánchez de Tagle, *Discurso del sr. D. Francisco Tagle en la sesión del 15 de diciembre sobre la creación de un Poder Conservador*, México, impreso por J.M. Fernández, 1835, pp. 9-10.

<sup>29</sup> Lucas Alamán, “Reflexiones sobre algunas reformas...”, *op. cit.*, p. 193.

son más que una naranja dividida en dos mitades, sin contrapeso de una a otra, que se puedan servir de freno recíproco".<sup>30</sup>

Al mismo tiempo, los críticos se quejaron de que la Constitución Federal no imponía requisitos de propiedad, ingreso ni experiencia a los congresistas, por lo que las cámaras se habían llenado de gente predispuesta a la intriga y el radicalismo.<sup>31</sup> Según este análisis, la clase no propietaria, además de su natural ignorancia, también carecía de las virtudes necesarias en un servidor público. Por no tener recursos propios, argumentaba, ambicionaba el poder para buscar su beneficio personal, no el del país y, asimismo, por no tener nada que perder en caso de una asonada, estaba siempre dispuesta a usar la intriga, la rebelión y la violencia para alcanzar sus metas.<sup>32</sup>

Las soluciones que se propusieron incluyeron la idea de imponer requisitos de propiedad, intereses o ingresos diferenciados a los candidatos a diputado y senador o bien insistir en que en los aspirantes hubiera experiencia previa en el gobierno federal o estatal. Las Siete Leyes retomaron la primera opción: la tercera ley requería que los diputados tuvieran un capital físico o moral mayor a mil quinientos pesos al año, mientras para ser senador se exigía un capital de más de dos mil quinientos pesos al año (arts. 6 y 12).

La mayor parte de los proyectos de la década de 1840 también seguían la ruta de asegurar la buena preparación de los congresistas mediante requisitos especiales. En el segundo proyecto de constitución de 1842 se proponía requerir que los senadores tuvieran un ingreso de tres mil pesos, pero incluía una cláusula que indicaba que este requisito podría ser suplido por la experiencia en el ramo de gobierno (art. 39). En cambio, las Bases Orgánicas estipulaban que los senadores electos debían ser representantes para clases especiales —agricultores, mineros, propietarios, comerciantes y fabricantes— o bien, hombres con servicios "de mérito en las carreras civil, militar y eclesiástica" (art. 93).<sup>33</sup> En el Acta de Reforma de 1847, no obstante, se volvieron a abandonar los requisitos de ingreso para los congresistas, pero se conservó la exigencia de alguna experiencia previa en el caso de los senadores (art. 10).<sup>34</sup>

<sup>30</sup> José Ramón Pacheco, *Cuestión del día o nuestros males y sus remedios*, México, Imprenta de Martín Rivera, a cargo de M. González, 1834, p. 33.

<sup>31</sup> Véase, por ejemplo, *El Sol*, 20 de octubre de 1829, p. 488; el editorial de *El Registro Oficial del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos* del 7 de junio de 1830.

<sup>32</sup> Véase Catherine Andrews, "Discusiones en torno...", *op. cit.*, pp. 77-85.

<sup>33</sup> "Bases de organización política de la república mexicana, 12 de junio de 1843", en Gloria Villegas Moreno, Miguel Ángel Porrúa Venero (coords.), *Entre el paradigma...*, *op. cit.*, pp. 351-375.

<sup>34</sup> "Acta Constitutiva y de Reformas, sancionada por el Congreso Extraordinario Constituyente de los Estados Unidos Mexicanos", en *ibid.*, pp. 408-417. El tema de la representación no se aborda en este ensayo. Sin embargo, es otro debate recurrente durante este periodo: ¿a quiénes representaban los diputados y los senadores? ¿Deben representar población o intereses distintos? Un texto que analiza esta cuestión en el caso de las elecciones de 1846 es el de José Antonio Aguilar Rivera, "La convocatoria, las elecciones y el congreso extraordinario de 1846", *Historia Mexicana*, vol. 61, núm. 2, 2011, pp. 531-588.

El pensamiento constitucional mexicano también exhibía una desconfianza marcada hacia el Poder Ejecutivo. La Constitución de Cádiz había otorgado al monarca una serie de facultades importantes que garantizaban una autonomía real frente a los demás poderes.<sup>35</sup> Sin consultar a las Cortes, el rey podía nombrar a todos los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, nombrar todos los empleos militares y civiles, conceder honores, dirigir el ejército y disponer de la fuerza armada, e indultar a los delincuentes (art. 171). Desde el Imperio de Iturbide, los que presentaron proyectos de constitución convinieron en quitar estas facultades del Poder Ejecutivo o señalar que su uso debía depender del acuerdo previo del Congreso General.<sup>36</sup> En 1824, el debate sobre la composición del Poder Ejecutivo y la extensión de sus facultades era uno de los más polémicos. El sentir de muchos constituyentes era que el Ejecutivo debía ser un triunvirato, para evitar el peligro de concentrar las facultades de este poder en un solo hombre.<sup>37</sup>

Aunque la Constitución de 1824 adoptó una presidencia unipersonal (con vicepresidente), no concedió facultades amplias al Poder Ejecutivo. Los ministros de la Suprema Corte fueron electos por los congresos de los estados (art. 127); mientras que la facultad de indultar se concedió exclusivamente al Congreso (art. 49 inciso 25). Las demás facultades se ejercían con la supervisión del Congreso o, en su ausencia, del Consejo de Gobierno. Críticos como Lucas Alamán, por ejemplo, consideraban la debilidad del Ejecutivo uno de los problemas fundamentales de la división de poderes:

El Presidente de los Estados Unidos del Norte puede destituir por su sola voluntad, sin formación de causa ni tener que decir siquiera el motivo, a todos los empleados militares, políticos y de hacienda de la federación a excepción sólo de los jueces, sin concederles pensión o retiro alguno y esta facultad puede usarse todas las veces como y cuando le parezca. Figuremos por un momento un Poder Ejecutivo armado con esta importante facultad, ¿cuál otro no será su influjo?<sup>38</sup>

En este sentido, una de las propuestas principales de los críticos de la Constitución de 1824 era la necesidad de abolir la vicepresidencia. Señalaron que el sistema de

<sup>35</sup> "Constitución política de la monarquía española", en Gloria Villegas Moreno y Miguel Ángel Porrúa Venero, (coords.), *De la crisis del modelo borbónico...*, op. cit., pp. 98-133.

<sup>36</sup> Catherine Andrews, "Constitutional Projects for the Division of Powers in Mexico During Iturbide's Empire (1821-1823)", *Journal of Latin American Studies*, vol. 46, núm. 4, 2014, pp. 755-784.

<sup>37</sup> Sesiones del Congreso Constituyente, 20-21 de enero de 1824, en *El Águila Mexicana*, 21-22 de enero de 1824. "Remitido", en *El Águila Mexicana*, 18 de febrero de 1824, "Continúan los votos sobre poder ejecutivo comenzados en el número anterior", *El Águila Mexicana*, 19 de febrero de 1824. También véase David M. Quinlan, "Issues and Factions in the Constituent Congress, 1823-1824", en Jaime E. Rodríguez O. (ed.), *Mexico in the Age of Democratic Revolutions, 1750-1850*, Boulder, Lynne Rienner Publishers, 1994, pp. 190-195.

<sup>38</sup> Lucas Alamán, "Examen imparcial de la administración del general vicepresidente D. Anastasio Bustamante. Con observaciones generales sobre el estado presente de la república y consecuencias que este debe producir", en *Documentos diversos (inéditos y muy raros)*, vol. 3, compilación de Rafael Aguayo Spencer, Editorial Jus, 1946, pp. 249-250.



elección que ponía al ganador de las elecciones en la presidencia y al contendiente que llegó en segundo lugar en la vicepresidencia había propiciado que todos los vicepresidentes se hubieran involucrado en rebeliones contra su rival.<sup>39</sup>

No obstante, durante el debate de 1830 prevalecían voces como la del Congreso de Nuevo León, que proponía transformar el Poder Ejecutivo en triunvirato.<sup>40</sup> En la propuesta de reforma constitucional aprobada para discusión por el Senado en 1831, se pretendía crear una especie de triunvirato Ejecutivo en que siempre habría un presidente titular, con dos "colegas" cogobernantes. De esta manera, el presidente en turno trabajaría con sus dos colegas para nombrar a los funcionarios, militares y diplomáticos, celebrar concordatos, dirigir negociaciones diplomáticas y dar reglamentos para asegurar el mejor cumplimiento de la constitución.<sup>41</sup>

Esta idea se retomó en el Congreso Constituyente de 1835, cuando el general Mariano Michelena replanteó el diseño de reforma del Senado en el proyecto de constitución que presentó ante el pleno en septiembre de 1835. Favoreció la idea de establecer un triunvirato compuesto de un presidente titular y dos "consejeros", con los que el mandatario en turno tendría que consultar antes de iniciar o publicar leyes, dar pase a bulas pontificias y dirigir negociaciones diplomáticas. Con un tono un tanto vago permitía al jefe del Poder Ejecutivo nombrar libremente a "todos los empleados que se crearan por las leyes", pero estipulaba que los nombramientos de los secretarios de despacho los hiciera en consulta con los otros integrantes. Proponía crear un Consejo de Gobierno separado, formado por dieciséis individuos nombrados por el presidente y a quienes el mandatario podría consultar "en materias de su preferencia". Parece que la idea era que sirvieran de apoyo al presidente y no como otra instancia de revisión.<sup>42</sup>

Con el afán de resolver los problemas de diseño de los poderes en la Constitución de 1824, los arquitectos de las Siete Leyes en 1836 retomaron las propuestas de los años previos. La cuarta ley constitucional abolió la vicepresidencia y creó un Consejo de Gobierno de trece miembros, incluyendo dos eclesiásticos y dos

<sup>39</sup> Catherine Andrews, "Discusiones en torno"..., *op. cit.*, pp. 88-90.

<sup>40</sup> "República Mexicana. Estado de Nuevo León. Iniciativa del congreso del estado del artículo 74 de la constitución federal", *El Sol*, 11 de julio de 1830, p. 1502.

<sup>41</sup> Cámara de Senadores, *Dictamen de la comisión de puntos constitucionales de la cámara de senadores sobre las reformas de la constitución federal; y voto particular de los Sres. Marín y Rodríguez sobre el mismo asunto*, México, Imprenta del Águila, dirigida por José Ximeno, 1831. El dictamen está firmado por Manuel Crescencio Rejón, Tomás Vargas y Juan Cayetano Portugal. Los otros dos miembros de la comisión (José Mariano Marín y Juan de Dios Rodríguez) estuvieron en desacuerdo con la posición de la mayoría y presentaron su voto por separado. Opinaron que un triunvirato no reduciría la intriga política asociada con la presidencia, sino que la aumentaría. Además, señalaron que, desde su punto de vista, ya existían suficientes limitaciones al poder del presidente y que, por lo tanto, no era necesario pasar los nombramientos del presidente por más instancias de revisión que las que proveía la Constitución Federal en su forma original.

<sup>42</sup> José Mariano Michelena, *Proyecto de constitución presentado al congreso general por el diputado del mismo José Mariano Michelena en 17 de setiembre de 1835*, México, Imprenta del Águila, dirigida por José Ximeno, calle de Medinas núm. 6, 1835.

miliares (art. 21), para reemplazarlo como parte integral del Poder Ejecutivo. Los integrantes serían consejeros vitalicios; electos por el presidente de una lista de candidatos elaborada por el Congreso. Su papel era actuar como un contrapeso al presidente: el presidente debería conseguir su apoyo antes de ejercer la mayor parte de sus atribuciones más importantes, a saber, iniciar leyes, ejercer su veto parcial y convocar al Congreso a sesiones extraordinarias (art. 17 incisos 2, 3 y 7). Asimismo, aunque la cuarta ley ampliaba las facultades del presidente, dándole atribuciones para nombrar a los gobernadores de los departamentos, autorizar la naturalización de ciudadanos extranjeros y conceder privilegios e indultos, especificaba que el presidente requería la aprobación del Consejo antes de ejercerlos (art. 17 incisos, 11, 24, 26, 31 y 34).

Sin embargo, la experiencia del Consejo de Gobierno de las Siete Leyes fue muy corta y encontró pocos admiradores. El proyecto de reforma a esta Constitución de 1839 recomendaba que se redujeran las facultades del Consejo para que el presidente pudiera consultarlo a su voluntad, pero no como prerrequisito de acción (arts. 94 y 99).<sup>43</sup> Los proyectos de 1842, las Bases Orgánicas y el Acta de Reforma, lo abandonaron por completo.

Por otra parte, en las Siete Leyes se experimentó con otra solución a las varias deficiencias con la división de poderes: la creación de un cuarto ramo de gobierno: el Supremo Poder Conservador. Se pretendía que esta institución fuera un poder de arbitrio que vigilara el cumplimiento de la constitución y pudiera anular los actos inconstitucionales de los otros tres poderes. De acuerdo con su principal proponente, Francisco Manuel Sánchez de Tagle, el Supremo Poder Conservador debía ser “un dique [...] que interpuesto entre los poderes sea el hasta aquí de su respectivo movimiento, sea la presa que los mantenga en la altura conveniente para que produzcan los bienes a los que están destinados, y no por bajar de su nivel artificial, se hagan del todo inútiles”.<sup>44</sup>

La idea de una institución guardiana para la constitución no era nada nuevo en la historia constitucional mexicana; de hecho, propuestas en este sentido habían circulado desde 1821.<sup>45</sup> No obstante, la realización de este proyecto fue sumamente impopular. Por un lado, los oponentes de las Siete Leyes lo vilipendiaron como un poder “monstruo” y “omnipotente” que revelaba el alma despótica de esta constitución. Esta acusación tuvo larga vida en la historiografía constitucional, a pesar de que no tenía sustento en los hechos.<sup>46</sup> De acuerdo con la segunda ley constitucional, el Supremo Poder Conservador no tenía autonomía de actua-

<sup>43</sup> “Proyecto de reformas, 9 de diciembre de 1839”, en Gloria Villegas Moreno y Miguel Ángel Porrúa Venero (coords.), *Entre el paradigma...*, op. cit., pp. 249-250.

<sup>44</sup> Francisco Sánchez de Tagle, op. cit., p. 10.

<sup>45</sup> Véase Catherine Andrews, “Moderation vs. Conservation: State Councils and Senates in Mexico’s First Constitutional Proposals”, *Mexican Studies/Estudios Mexicanos*, vol. 33, núm. 1, 2017, pp. 153-166.

<sup>46</sup> Véase Catherine Andrews, *De Cádiz a Querétaro. Historiografía y bibliografía del constitucionalismo mexicano*, México, CIDE/PCE, 2017.

ción, solamente podría anular una ley si lo excitara alguno de los otros poderes a este fin (art. 12 inciso 1).

Por otro lado, el Supremo Poder Conservador tampoco pudo contar con apoyo entre los que habían abogado por su creación. Por sorprendente que sea (o no), fue su propia actuación la que lo condenó al aislamiento. Durante el gobierno de Bustamante, este poder anuló varios actos ejecutivos del presidente (la importación extralegal de hilaza de algodón por el ejército en 1840, por ejemplo) y declaró nula la ley de ladrones con la que se buscaba enjuiciar a delincuentes del fuero común en tribunales militares. Al mismo tiempo, el Supremo Poder Conservador también bloqueó los intentos de Bustamante para obtener facultades extraordinarias (que fueron explícitamente prohibidas en la Constitución de 1836) a finales de 1840.<sup>47</sup>

Con estas acciones el Supremo Poder Conservador incitó el disgusto del presidente. El primer día de 1841, en su discurso de la apertura de las sesiones del Congreso General, Bustamante anunció que su gobierno iba a promover la reforma de la Constitución de 1836. Entre las reformas que proponía estaba la desaparición del Supremo Poder Conservador. Defendía la propuesta de la manera siguiente:

Si el Ejecutivo, señores, no ha de estar suficientemente autorizado, si sus actos y los del Congreso General se han de anular por otro cuerpo desconocido en las instituciones modernas, no tengáis la menor esperanza de la felicidad pública. Lejos de que se conserve el equilibrio de los supremos poderes [...] se suscitarán a cada paso cuestiones que dividan los ánimos, den pretextos para el desorden y privar a la administración suprema de los respetos que se le deben.<sup>48</sup>

A pesar del fracaso del Supremo Poder Conservador, los políticos mexicanos no abandonaron la idea de establecer un sistema por el que un acto inconstitucional por parte de uno de los poderes públicos pudiera ser anulado. No obstante, se negaban a entregar esta atribución al Poder Judicial y preferían encargar la facultad de anulación al Legislativo. En el segundo proyecto de la comisión constitucional de 1842 se proponía un arreglo por el que la Cámara de Diputados estaría facultada para anular los actos de la Suprema Corte de Justicia o los tribunales de los departamentos (art. 140); mientras que el Senado podría anular los actos del Poder Ejecutivo y los de las asambleas departamentales a petición expresa del gobernador (art. 141). Es de notar, sin embargo, que no hubo mecanismo para anular los actos del Congreso General.

<sup>47</sup> Catherine Andrews, *Entre la espada y la constitución. El general Anastasio Bustamante (1780-1853)*, México, Universidad Autónoma de Tamaulipas/Instituto de Investigaciones Parlamentarias del H. Congreso de Tamaulipas, 2008, pp. 280-285.

<sup>48</sup> Anastasio Bustamante, "El general Bustamante al abrir las sesiones del primer periodo en 1º de enero de 1841", en *Los presidentes de México ante la nación*, vol. 1, México, LII Legislatura de la Cámara de Diputados, 1985, pp. 214-215.

El Acta de Reforma de 1847, en cambio, sugirió que se debía confiar a los estados la facultad de anular la legislación del Congreso General. En el artículo 23, especificó que:

Si [...] una ley del Congreso General, fuere reclamada como anticonstitucional, o por el Presidente, de acuerdo con su ministerio, o por diez diputados, o seis senadores, o tres legislaturas, la suprema corte, ante la que se hará el reclamo, someterá la ley al examen de las legislaturas, las que dentro de tres meses, y precisamente en un mismo día, darán su voto.

Quedaría "anulada la ley si así lo resolviera la mayoría de las legislaturas". A la inversa, el Acta de Reforma volvió a encargar al Congreso General la facultad de anular las leyes de los estados. De esta forma se establecía un equilibrio constitucional en el que los estados vigilaban la actuación de los poderes federales y los federales la de los estados.

### DERECHOS Y GARANTÍAS

Íntimamente vinculada con la cuestión de cómo impedir que los poderes públicos sobrepasaran sus límites constitucionales, estaba la inclusión de una declaración de derechos del hombre en la Constitución, la otra gran novedad de los proyectos de 1840. En este tema, el código federal de 1824 había seguido el ejemplo de la carta española de 1812 en no empezar con una declaración expresa de derechos a la manera francesa. No obstante, la Constitución de 1824 sí establecía un número importante de requisitos (o derechos procesales) para la impartición de justicia (arts. 46-56). Tales requerimientos volvieron a repetirse en todas las constituciones estatales. La mayoría de los estados —por ejemplo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Tamaulipas y Yucatán— incluyeron también, en la primera sección de su constitución, un artículo o varios en los que proclamaban su reconocimiento de los "derechos imprescriptibles" de libertad, igualdad, propiedad y seguridad.

A pesar de esto, una de las principales críticas de la Constitución de 1824 a partir de 1830 era la naturaleza fragmentada de la administración de justicia y la imposibilidad de asegurar que la ley se aplicara de manera igualitaria en toda la república. De modo que la vasta mayoría de los proyectos constitucionales posteriores a 1824 también contemplaban la inclusión de una declaración expresa de derechos. En 1836, la primera ley constitucional establecía los derechos de los mexicanos, la cual reproducía las mismas reglas para el proceso judicial que habían aparecido en el texto de 1824. Aunque al establecer la primera ley en la que únicamente los mexicanos gozaban de sus derechos, el código de 1836 excluía a los residentes extranjeros de la protección de sus previsiones.

Los proyectos de 1842 y las Bases Orgánicas de 1843 volvieron a extender los derechos constitucionales a todos los residentes de la República. También reafirmaron la prohibición de la esclavitud y experimentaron con la adición de

nuevos derechos. Los proyectos de 1842 incluyeron la libertad de enseñanza y de tránsito, por ejemplo. Subrayaron asimismo con artículos constitucionales la igualdad ante la ley, la prohibición de tribunales especiales y la obligación de los poderes públicos de no hacer más de lo que la ley permitía.

El interés en incluir una declaración de derechos en la constitución provenía de otra inquietud entre los críticos de la Constitución de 1824 acerca del diseño constitucional: la ausencia de un mecanismo para proteger los derechos de los ciudadanos frente a los abusos de los gobernantes. Decía José Ramón Pacheco en 1834, por ejemplo:

De la misma manera los poderes, siendo cada uno supremo en su órbita, no están equilibrados, porque impunemente uno invade la del otro, y el judicial por ejemplo, que debería ser el guardián de las garantías protectoras del ciudadano y del hombre, no está expresamente obligado bajo la pena de la infamia, y de la pérdida del empleo de sus miembros, a contener a los otros dos en sus usurpaciones; antes bien, se ha conducido como subalterno respecto de ellos.<sup>49</sup>

Durante la vigencia de la Constitución de 1824, las Siete Leyes y las Bases Orgánicas, hubo dos mecanismos para reclamar los abusos de los gobernantes. El primero era el recurso de nulidad que se podría pedir para sentencias que causaban ejecutoria en casos civiles y criminales y el segundo, el juicio de responsabilidad para funcionarios de gobierno.

En la Constitución de 1824 el juicio de responsabilidad se desprendía de los artículos 163 y 164 que obligaban a todo funcionario a “prestar juramento para guardar la constitución” y encargaban al Poder Legislativo “dar las leyes y decretos conducentes” a hacer efectiva la responsabilidad. Las quejas contra los funcionarios se presentaban primero ante una de los dos cámaras del Congreso, y si los legisladores votaban que había lugar a la formación de causa, el caso pasaría al Judicial para sentencia (art. 40). Las demás constituciones del periodo conservaron una versión de este proceso.

A partir de las Siete Leyes, hubo también el intento de garantizar los derechos reconocidos en la constitución mediante la responsabilidad y el recurso de nulidad. En la primera ley constitucional, por ejemplo, se indicaba que las autoridades políticas y judiciales que no respetaran los derechos procesales señalados en el artículo 2 (no ser preso sin orden de mandamiento de juez competente, no ser detenido más de tres días sin ser presentado a la autoridad judicial ni diez días sin que se le proveyera el auto motivado de prisión), “ser[ía]n responsables del abuso”. La quinta ley constitucional señalaba, por otra parte, que toda falta de observancia de los procesos constitucionales produciría su nulidad en lo civil y lo criminal y era “motivo de responsabilidad contra los jueces que la cometie-

<sup>49</sup> José Ramón Pacheco, *op. cit.*, p. 32.

ren".<sup>50</sup> Igualmente, las Bases Orgánicas reproducían las disposiciones de las Siete Leyes en los artículos 118 (inciso XII) y 182.

En los proyectos de constitución de 1842 apareció un nuevo mecanismo para la protección de los derechos: el juicio de amparo. El proyecto de la minoría —cuyo autor era Mariano Otero— introducía la idea de una garantía constitucional para los derechos. El artículo 5 de este proyecto, rezaba que "la Constitución otorga a los derechos del hombre las garantías" que subsiguientemente se enumeraban. En el segundo proyecto —producto de la discusión en el Constituyente de 1842 de los dos primeros— se declaraba que la Constitución "reconoce" los derechos naturales y que les "otorg[ar] en consecuencia las [...] garantías" expresadas.

El objetivo de garantizar los derechos de esta manera significaba también permitir que los ciudadanos pudieran buscar remedio en caso de que los poderes públicos no respetaran los derechos constitucionales. Como rezaba el art. 150 del segundo proyecto de 1842:

Todo acto de los Poderes Legislativo o Ejecutivo de alguno de los estados que se dirijan a privar a una persona determinada de alguna de las garantías que otorga esta constitución puede ser reclamado por el ofendido ante la Suprema Corte de Justicia, la que deliberado a mayoría absoluta de votos, decidirá definitivamente el reclamo.

Aunque el proyecto de 1842 nunca se promulgó, el recurso del amparo que proponían los constituyentes de 1842 se reconoció en el Acta de Reforma de 1847 y fue incluido en la Constitución de 1857.

La inclusión de una declaración de derechos y el amparo en el texto constitucional fue otra manera de reforzar una clara jerarquía entre el gobierno federal y los gobiernos de los estados. Con ambas reformas, es el Poder Judicial de la Federación el que se establecía como el último guardián de la constitución. No obstante, es claro que el proyecto de reforma constitucional de Otero se resistía a entregar el mismo peso a los tribunales superiores que tenían dentro del sistema norteamericano, o bien la misma importancia que ostentaba el Supremo Poder Conservador dentro del sistema constitucional de 1836. El juicio de amparo era un mecanismo individual de reclamo. De acuerdo con el art. 25 del Acta de Reforma, su uso debía ceñirse a la "fórmula Otero", por la que la sentencia en los casos de amparo era solamente aplicable al quejoso y no significaba la anulación de la ley o el acto en relación con otros actores.<sup>51</sup> De hecho, como subrayé en el apartado anterior, el Acta encargaba al Poder Legislativo exclusivamente la facultad de anular leyes y actos.

<sup>50</sup> Arts. 37 y 38. Se trata de la incorporación del art. 254 de la Constitución española de 1812: "Toda falta a la observancia de las leyes que arreglan el proceso de los casos en lo civil y lo criminal hace responsable personalmente a los jueces que lo cometieren".

<sup>51</sup> Sobre los usos del amparo véase Héctor Fix-Zamudio, "Breve introducción al juicio de amparo mexicano," en *Ensayos sobre el derecho de amparo*, México, IJ-UNAM, 1993, pp. 30-31.

## CONSIDERACIONES FINALES

Para 1830 estaba claro para muchos que la Constitución Federal de 1824 era incapaz de garantizar “el imperio de las leyes”, y para 1847 hasta los federalistas más aficionados al código estaban de acuerdo. Como se ha demostrado en este capítulo, las reformas establecidas por el Acta Constitutiva de 1847 derivaban en su vasta mayoría de propuestas que llevaban circulando entre los políticos mexicanos quince o veinte años.

A partir de 1830 hubo una tendencia creciente a favor de la federalización o bien, un abandono del modelo federal de la Constitución de 1824 por un modelo en el que existiera una jerarquía más clara entre el gobierno federal y los gobiernos de los estados. No obstante —y como evidenciaba el Acta de Reforma de 1847—, los mexicanos aún preservaban la idea de que el sistema federal tenía un papel importante en la división de poderes como contrapeso contra los posibles abusos por parte de los poderes federales.

Al mismo tiempo, se empezaban a perfilar dos modelos de control constitucional dentro del ideario constitucional. Por un lado, estaban las propuestas que confiaban en los mecanismos de anulación. Los ejemplos más acabados de esta tendencia son el Supremo Poder Conservador de las Siete Leyes y las propuestas de los proyectos de 1840 para que el Congreso tuviera las facultades para anular la legislación repudiada por anticonstitucional por el otro poder. El juicio de amparo es el segundo mecanismo. Como se ha notado en este trabajo, ambos procesos coexistieron en la década de 1840. A partir de 1857 se abandonó paulatinamente el mecanismo de anulación a favor del amparo judicial.<sup>52</sup>

En tercer lugar, es importante reconocer la desconfianza arraigada en el Poder Ejecutivo que caracterizó gran parte de las constituciones y proyectos de constitución analizados en este ensayo. Ninguna constitución mexicana del siglo XIX permitía que el titular de este poder tuviera las facultades amplias y la autonomía que gozaba el monarca de acuerdo con la Constitución de Cádiz. A pesar de la evidente importancia simbólica de la presidencia para la política mexicana decimonónica, es innegable que los constituyentes de 1824, 1836, 1843 y 1847 se esforzaban para establecer límites y frenos para el ejercicio de sus atribuciones.

En breve, este capítulo demuestra que el Acta de Reforma de 1847 se debe entender como un resultado de los debates constitucionales previos. Asimismo, sugiere que la Constitución de 1857 tampoco se puede comprender sin este

<sup>52</sup> A pesar de que la Constitución de 1857 todavía permitía el uso del recurso de nulidad, a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX fue desplazado por el amparo judicial o de casación. Véase Héctor Fix-Zamudio, “La Suprema Corte y el juicio del amparo”, en *Ensayos sobre el derecho de amparo*, México, IJ-UNAM, 1993, pp. 385-478. En el Constituyente de 1856 el proyecto de Mariano Arizcorreta sugirió retomar la práctica de facultar al Congreso General para declarar nulas a las leyes de los estados, y a (una mayoría de) las legislaturas la prerrogativa de anular las leyes del Congreso General. No prosperó la iniciativa. Véase Arroyo García, *op. cit.*, pp. 300-303.



mismo contexto histórico. La declaración de derechos, el juicio de amparo y el Poder Ejecutivo débil que caracterizan a este código, todos provienen de proyectos constitucionales anteriores. En la historia constitucional del siglo XIX, por lo tanto, tal vez haya tantas continuidades como rupturas.

### HEMEROGRAFÍA

*El Águila Mexicana* (1823-1824)

*El Cosmopolita*, Ciudad de México (1837-1841)

*El Sol*, Ciudad de México (1829-1832, 1835)

*El Diario de Gobierno*, Ciudad de México (1835-1847)

*El Observador de la República Mexicana*

*El Registro Oficial del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos*, Ciudad de México, (1830-1832)

### BIBLIOGRAFÍA

"Acta Constitutiva y de Reformas, sancionada por el Congreso Extraordinario Constituyente de los Estados Unidos Mexicanos", en Gloria Villegas Moreno, Miguel Ángel Porrúa Venero (coords.), *Enciclopedia Parlamentaria de México: Leyes y documentos constitutivos de la nación mexicana. Entre el paradigma político y la realidad*, t. 2, México, Instituto de Investigaciones Legislativas de la Cámara de Diputados, LXI Legislatura, 1997 (Enciclopedia Parlamentaria de México, serie 3, vol. 1), pp. 408-417.

Aguilar Rivera, José Antonio, "La convocatoria, las elecciones y el congreso extraordinario de 1846", *Historia Mexicana*, vol. 61, núm. 2, 2011, pp. 531-588.

Alamán, Lucas, "Reflexiones sobre algunas reformas a la Constitución Federal de la República Mexicana", en Catherine Andrews, *Anuario Mexicano de Historia del Derecho*, vol. 25, 2012, pp. 186-189.

\_\_\_\_\_, "Examen imparcial de la administración del general vicepresidente D. Anastasio Bustamante. Con observaciones generales sobre el estado presente de la república y consecuencias que este debe producir", en *Documentos diversos (inéditos y muy raros)*, vol. 3, compilación de Rafael Aguayo Spencer, Editorial Jus, 1946, pp. 236-275.

Andrews, Catherine, *De Cádiz a Querétaro. Historiografía y bibliografía del constitucionalismo mexicano*, México, CIDE/FCE, 2017.

\_\_\_\_\_, "Moderation vs. Conservation: State Councils and Senates in Mexico's First Constitutional Proposals", *Mexican Studies/Estudios Mexicanos*, vol. 33, núm. 1, 2017, pp. 153-166.

\_\_\_\_\_, "Constitutional Projects for the Division of Powers in Mexico During Iturbide's Empire (1821-1823)", *Journal of Latin American Studies*, vol. 46, núm. 4, 2014, pp. 755-784.

\_\_\_\_\_, "Las ideas de José María Luis Mora para la reforma de la Constitución Federal de

1824. Un análisis de los ensayos publicados en *El Observador de la República Mexicana* (1830)", en Rafael Estrada Michel y Mario Armando Téllez González (coord.), *José María Luis Mora. Un hombre de su tiempo*, México, INACIPE/UAM-Cuajimalpa, 2014, pp. 1-35.
- \_\_\_\_\_, "Reflexiones sobre algunas reformas a la Constitución Federal de la República Mexicana", *Anuario Mexicano de Historia del Derecho*, vol. 25, 2012, pp. 143-214.
- \_\_\_\_\_, "¿Reformar o reconstituir? El debate en torno al destino de la Constitución Federal y el sistema de gobierno (1830-1835)", en Marco Landavazo y Agustín Sánchez Andrés (coords.), *Experiencias republicanas y monárquicas en México, América Latina y España*, Morelia, UMSNH, 2008, pp. 15-42.
- \_\_\_\_\_, *Entre la espada y la constitución. El general Anastasio Bustamante (1780-1853)*, México, Universidad Autónoma de Tamaulipas/Instituto de Investigaciones Parlamentarias del H. Congreso de Tamaulipas, 2008.
- \_\_\_\_\_, "Discusiones en torno a la reforma de la Constitución Federal de 1824 durante el primer gobierno de Anastasio Bustamante (1830-1832)", *Historia Mexicana*, vol. 56, núm. 1, 2006, pp. 71-116.
- Arroyo García, Israel, *La arquitectura del Estado mexicano: Formas de gobierno, representación política y ciudadanía, 1821-1857*, México, Instituto Mora, 2011.
- "Bases constitucionales expedidas por el Congreso Constituyente, 15 de diciembre de 1835", en Gloria Villegas Moreno y Miguel Ángel Porrúa Venero (coords.), *Enciclopedia Parlamentaria de México: Leyes y documentos constitutivos de la nación mexicana. Entre el paradigma político y la realidad*, t. 2, México, Instituto de Investigaciones Legislativas de la Cámara de Diputados, LXI Legislatura, 1997 (Enciclopedia Parlamentaria de México, serie 3, vol. 1), pp. 197-199.
- "Bases de organización política de la república mexicana, 12 de junio de 1843", en Gloria Villegas Moreno y Miguel Ángel Porrúa Venero (coords.), *Enciclopedia Parlamentaria de México: Leyes y documentos constitutivos de la nación mexicana. Entre el paradigma político y la realidad*, t. 2, México, Instituto de Investigaciones Legislativas de la Cámara de Diputados, LXI Legislatura, 1997 (Enciclopedia Parlamentaria de México, serie 3, vol. 1), pp. 351-375.
- Benson, Nettie Lee, *La diputación provincial y el federalismo mexicano*, México, El Colegio de México/UNAM, 1994.
- Bustamante, Anastasio, "El general Bustamante al abrir las sesiones del primer periodo en 1º de enero de 1841", en *Los presidentes de México ante la nación*, vol. 1, México, LII Legislatura de la Cámara de Diputados, 1985, pp. 214-215.
- Cámara de Senadores, *Dictamen de la comisión especial de la cámara de senadores sobre el cambio de la forma de gobierno y voto particular del sr. Bernardo Couto*, México, Imprenta del Águila, 1835, p. 32.
- \_\_\_\_\_, *Dictamen de la comisión de puntos constitucionales de la cámara de senadores sobre las reformas de la constitución federal; y voto particular de los Sres. Marín y Rodríguez sobre el mismo asunto*, México, Imprenta del Águila, dirigida por José Ximeno, 1831.
- Carmagnani, Marcello, "Territorios, provincias y estados: Las transformaciones de los

- espacios políticos en México", en Josefina Zoraida Vázquez (coord.), *La fundación del Estado Mexicano, 1821-1855*, México, Nueva Imagen, 1997, pp. 39-73.
- \_\_\_\_\_, "El federalismo liberal mexicano", en Marcello Carmagnani (coord.), *Federalismos latinoamericanos: México/Brasil/Argentina*, México, FCE/Fideicomiso Historia de las Américas, 1993, pp. 135-179.
- "Constitución federal de los Estados Unidos Mexicanos sancionada por el Congreso general constituyente, 4 de octubre de 1824", en Gloria Villegas Moreno y Miguel Ángel Porrúa Venero (coords.), *Leyes y documentos constitutivos de la nación mexicana. De la crisis del modelo borbónico al establecimiento de la República Federal*, t. 1, México, Instituto de Investigaciones Legislativas de la Cámara de Diputados, LXI Legislatura, 1998 (Enciclopedia Parlamentaria de México, vol. 1), pp. 335-361.
- "Constitución política de la monarquía española", en Gloria Villegas Moreno y Miguel Ángel Porrúa Venero (coords.), *Leyes y documentos constitutivos de la nación mexicana. De la crisis del modelo borbónico al establecimiento de la República Federal*, t. 2, México, Instituto de Investigaciones Legislativas de la Cámara de Diputados, LXI Legislatura, 1998 (Enciclopedia Parlamentaria de México, vol. 1), pp. 98-133.
- Fix-Zamudio, Héctor, "Breve introducción al juicio de amparo mexicano", en *Ensayos sobre el derecho de amparo*, México, IJ-UNAM, 1993, pp. 19-76.
- \_\_\_\_\_, "La Suprema Corte y el juicio del amparo", en *Ensayos sobre el derecho de amparo*, México, IJ-UNAM, 1993, pp. 385-478.
- Hale, Charles A., *El liberalismo mexicano en la época de Mora*, México, Siglo XXI, 1999.
- Hernández Jaimes, Jesús, *La formación de la Hacienda pública mexicana y las tensiones centro-periferia, 1821-1835*, México, El Colegio de México/IJH-UNAM/Instituto Mora, 2013.
- "Leyes constitucionales, 20 de diciembre de 1836", en Gloria Villegas Moreno y Miguel Ángel Porrúa Venero (coords.), *Enciclopedia Parlamentaria de México: Leyes y documentos constitutivos de la nación mexicana. Entre el paradigma político y la realidad*, t. 2, México, Instituto de Investigaciones Legislativas de la Cámara de Diputados, LVI Legislatura, 1997 (Enciclopedia Parlamentaria de México, serie 3, vol. 1), pp. 202-234.
- Michelena, José Mariano, *Proyecto de constitución presentado al congreso general por el diputado del mismo José Mariano de Michelena en 17 de setiembre de 1835*, México, Imprenta del Águila, dirigida por José Ximeno, calle de Medinas núm. 6, 1835.
- Otero, Mariano, "Voto particular de Mariano Otero (5 de abril de 1847)", en *La Suprema Corte de Justicia. Sus leyes y sus hombres*, México, SCJN, 1985, pp. 127-141.
- Pacheco, José Ramón, *Cuestión del día o nuestros males y sus remedios*, México, Imprenta de Martín Rivera, a cargo de M. González, 1834.
- "Primer proyecto de constitución. Constitución política de la República Mexicana, 25 de agosto de 1842", en Gloria Villegas Moreno y Miguel Ángel Porrúa Venero (coords.), *Enciclopedia Parlamentaria de México: Leyes y documentos constitutivos de la nación mexicana. Entre el paradigma político y la realidad*, t. 2, México, Instituto de Investigaciones Legislativas de la Cámara de Diputados, LVI Legislatura, 1997 (Enciclopedia Parlamentaria de México, serie 3, vol. 1), pp. 274-299.

- Quinlan, David M., "Issues and Factions in the Constituent Congress, 1823-1824", en Jaime E. Rodríguez O. (ed.), *Mexico in the Age of Democratic Revolutions, 1750-1850*, Boulder, Lynne Rienner Publishers, 1994, pp. 177-207.
- Rabasa, Emilio, *La constitución y la dictadura*, México, Conaculta, [1912] 2002 (Cien de México).
- Sánchez de Tagle, Francisco Manuel, *Discurso del sr. D. Francisco Tagle en la sesión del 15 de diciembre sobre la creación de un Poder Conservador*, México, impreso por J.M. Fernández, 1835.
- "Segundo proyecto de constitución", en Gloria Villegas Moreno y Miguel Ángel Porrúa Venero (coords.), *Leyes y documentos constitutivos de la nación mexicana. Entre el paradigma político y la realidad*, t. 2, México, Instituto de Investigaciones Legislativas de la Cámara de Diputados, LVI Legislatura, 1997 (Enciclopedia Parlamentaria de México, serie 3, vol. 1), pp. 322-347.
- Serrano Ortega, José Antonio, "Tensar hasta romperse, la política de Lorenzo de Zavala", en Leonor Ludlow (coord.), *Los secretarios de Hacienda y sus proyectos (1821-1933)*, México, IIH-UNAM, 2002, vol. 1, pp. 87-110.
- Vázquez, Josefina Zoraida (coord.), *El establecimiento de federalismo en México (1821-1827)*, México, El Colegio de México, 2003.
- \_\_\_\_\_, "El primer liberalismo mexicano", en Josefina Zoraida Vázquez (coord.), *Recepción y transformación del liberalismo en México. Homenaje al profesor Charles A. Hale*, México, El Colegio de México, 1999, pp. 31-40.
- \_\_\_\_\_, "El fracaso del liberalismo centralista mexicano", *Anuario del IEHS*, 1996, pp. 111-112.
- \_\_\_\_\_, "El federalismo mexicano, 1823-1847", en Marcello Carmagnani (coord.), *Federalismos latinoamericanos: México/Brasil/Argentina*, México, FCE/Fideicomiso Historia de las Américas, 1993, pp. 15-50.
- Victoria, Guadalupe, *Voto particular del senador Guadalupe Victoria sobre el proyecto de ley en que se declara que las actuales Cámaras tienen facultad para variar la forma de gobierno*, México, Imprenta del Águila, 1835.
- Villegas Moreno, Gloria y Miguel Ángel Porrúa Venero (coords.), *Leyes y documentos constitutivos de la nación mexicana. De la crisis del modelo borbónico al establecimiento de la República Federal*, t. 1, México, Instituto de Investigaciones Legislativas de la Cámara de Diputados, LVI Legislatura, 1998 (Enciclopedia Parlamentaria de México, serie 3, vol. 1).
- Villegas Moreno, Gloria y Miguel Ángel Porrúa Venero (coords.), *Leyes y documentos constitutivos de la nación mexicana. Entre el paradigma político y la realidad*, t. 2, México, Instituto de Investigaciones Legislativas de la Cámara de Diputados, LVI Legislatura, 1998 (Enciclopedia Parlamentaria de México, serie 3, vol. 1).
- "Voto particular de la minoría de la comisión al primer proyecto de Constitución Política de la República Mexicana del 25 de agosto de 1842", en Gloria Villegas Moreno y Miguel Ángel Porrúa Venero (coords.), *Leyes y documentos constitutivos de la nación mexicana. Entre el paradigma político y la realidad*, t. 2, México, Instituto de Investiga-

ciones Legislativas de la Cámara de Diputados, LVI Legislatura, 1997 (Enciclopedia Parlamentaria de México, serie 3, vol. 1), pp. 299-322.

"Voto particular de Mariano Otero (5 de abril de 1847)", *La Suprema Corte de Justicia. Sus leyes y sus hombres*, México, SCJN, 1985, pp. 136-137.